

**RECURSO DE REVISION No. 019-AP-DPE- 2012**

**TRAMITE DEFENSORIAL No. Q22010000208-2010.**

**DEFENSORIA DEL PUEBLO DEL ECUADOR.- Adjuntía Primera.-** Quito, 22 de agosto de 2012.- a las 09h58.- Vistos.- Con fundamento en lo preceptuado en el Art. 26 del Reglamento de Trámite de Quejas, Recursos Constitucionales y Demandas de Inconstitucionalidad de Competencia del Defensor del Pueblo, y la Resolución No. 013-DDP-2011 y amparada en la Acción de Personal No. 0440, de fecha 16 de julio del 2012, en mi calidad de Adjunta Primera Subrogante, avoco conocimiento del Recurso de Revisión suscrito por el señor Delegado del Defensor del Pueblo en la Provincia de Orellana, interpuesto por el señor Pablo Antonio Flores Cueva representante legal y apoderado del CONSORCIO PEGASO, presentado el 03 de febrero de 2012, sobre la Resolución Defensorial, emitida el 26 de enero de 2012, dentro de la Queja N°- Q22010000208 de 22 de noviembre de 2010.

## **I.- ANTECEDENTES**

1. El señor Pilco Hidalgo Euterio mediante escrito dirigido al Delegado de la Defensoría del pueblo de Orellana, de fecha 22 de noviembre de 2010 presenta una queja en la cual manifiesta: "Que con fecha 05 de octubre de 2010, el Consorcio Pegaso y la Cia. Sinopec, me involucraron y lograron que les firmará un Convenio de pago por indemnización, por derecho de paso, manifestándome si nos les firmaba traerían a la Fuerza Pública para meterme preso, además me manifestaron que sólo se afectaría 14 hectáreas de mi lote de terreno, y así se hizo constar en el convenio firmado".
2. Agrega además que: "clandestinamente el personal de la contratista del Consorcio Pegaso, han ingresado a la finca de mi propiedad, sin respetar el convenio firmado, han procedido a abrir trochas en toda la superficie de mi finca, esto es en las cincuenta hectáreas, además han colocado los puntos para la perforación de los explosivos, entre otros perjuicios más; al ir a reclamar a los principales de Pagaso, lo único que me han dicho

es que ya me pagaron y que no reclame más, y si que no dejen entrar a los taladros, me van a mandar una paliza; además traerán a la Fuerza Pública para que me metan preso”.

3. Manifiesta que: “(...) es verdad que les firme el permiso de paso, pero sólo para las 14 hectáreas que decían iban a ser afectadas, pero ahora resulta que dañaron toda mi finca de cincuenta hectáreas, lo que violenta claras disposiciones constitucionales, como es el derecho a la propiedad privada, derecho protegido por nuestra constitución en su Art. 66, No. 22 y 26. Además debo denunciar, que nunca fui consultado ni informado sobre los impactos que la actividad sísmica deja en la naturaleza”.
4. Denuncia también: “Que he puesto la denuncia en la Delegación del MAE de esta provincia, pero hasta la fecha no han hecho nada para resolver mi situación, lo que es aprovechado por la Compañía denunciada, ahora a la fuerza están pretendiendo ingresar a mi propiedad, incluso me han amenazado que si no permito su ingreso, me acusarán de ladrón y me meterán preso”.
5. A foja 4 reposa la Providencia mediante la cual el Delegado Provincial de la Defensoría del Pueblo de Orellana avoca conocimiento y acepta a trámite la queja, actuando tal como estipula la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo y el Reglamento de Trámite de Quejas, Recursos Constitucionales y Demandas de Inconstitucionalidad de competencia del Defensor del Pueblo, así como también convocando a las partes a una Audiencia Defensorial y solicita a las compañías denunciadas documentación sobre Los estudios de impacto ambiental y el alcance para la prospección geofísica; documentación sobre los justificativos de haber consultado e informado los respectivos estudios de impacto ambiental y su alcance y documentación sobre los justificativos de permisos de paso por la propiedad del señor Eleuterio Pilco Hidalgo.
6. De fojas 06 a 10 consta el escrito de contestación a la queja, realizada por el señor Pablo Antonio Flores Cueva,



Defensoría  
del Pueblo

El Defensor del Pueblo es un órgano constitucional

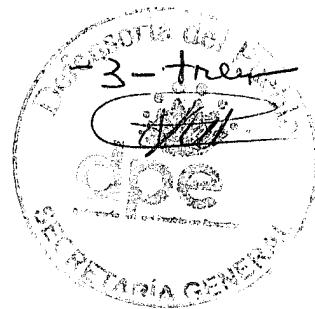
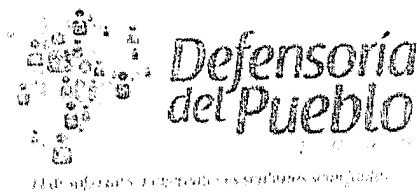


representante legal de la Compañía Campo Puma Oriente S.A., persona jurídica que ejerce la representación legal y la operación del Consorcio Pegaso, quien manifiesta haber cumplido con todos los pasos y requisitos establecidos en la ley adjuntando la documentación que lo justifica. En la parte de Excepciones alega: a) **Incompetencia de la Defensoría del Pueblo para investigar el caso por cuanto los asuntos objeto de la queja han sido sometidos a Resolución de otra autoridad administrativa**, la Delegación Provincial de Francisco de Orellana del Ministerio de Ambiente, como lo reconoce el propio denunciante en su queja, razón por la cual, argumentan, el Comisionado está en la obligación de suspender el presente expediente y aplicar lo dispuesto en el Art. 18 de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, esto es, realizar la vigilancia del debido proceso.

7. Alegan también: b) Incompetencia del Defensor del Pueblo por convenio expreso entre las partes, ya que existe de por medio un Convenio de Pago por Indemnización por Derecho de Paso, notariado, en cuya cláusula Quinta las partes acordaron que: "en caso de existir alguna controversia, conflicto o incumplimiento respecto de este convenio, las partes buscarán un acuerdo directo para solucionarlo. En caso de subsistir el conflicto las partes libre y voluntariamente se someten a ventilar su controversia, ante los jueces competentes del Cantón"; c) Improcedencia de la Queja y d) Negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho de la queja.
8. De fojas 91 a 93, reposa la Resolución Defensorial emitida el 26 de Enero de 2012, por el señor Delegado Encargado del Defensor del Pueblo en la Provincia de Orellana, que en la parte resolutive expresa: *"UNO.- DETERMINAR.- Que se ha producido la vulneración del derecho constitucional que tiene el accionante a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, libre de contaminación y en armonía con la naturaleza tal como lo determina el Art. 66 numeral 27 de la Constitución de la República; así también existe la vulneración del Art. 66 numerales 22 y 26 de la misma carta constitucional que refiere al derecho de propiedad en todas sus formas. DOS.-*

PREVENIR Y EXIGIR.- Al representante legal de la EMPRESA CONSORCIO PEGASO y en forma solidaria a la contratista SINOPEC procedan de forma inmediata disponer la correspondiente restauración ambiental en la finca del accionante Eleuterio Pilco Hidalgo, por consecuencia de haberse llevado a cabo la sismicidad. De igual manera se conmina a los representantes legales de las empresas mencionadas en líneas anteriores, respecto de sus obligaciones de reparar, esto es compensar los daños y perjuicios ocasionados, así como el pago de las legales y pertinentes indemnizaciones que correspondan tanto al accionante, como también a los otros dueños de propiedades afectadas por los referidos trabajos de sismicidad. Se deja en libertad a las partes para que presenten acciones Administrativas, Constitucionales y Legales, en caso de creerlo pertinente".

9. De fojas 96 a 98 reverso, consta el Recurso de Revisión interpuesto por el señor Pablo Antonio Flores Cueva, apoderado General y representante legal de la Compañía Campo Puma Oriente S.A. Persona jurídica que a su vez comparece en su calidad de representante legal y operadores del Consorcio Pagaso, quien con fundamento en Art. 26 del Reglamento de Trámite de Quejas, Recursos Constitucionales y Demandas de Inconstitucionalidad de Competencia del Defensor del Pueblo, solicita que la Resolución emitida dentro del Trámite Defensorial No. Q22010000208-2010 sea remitida al Defensor del Pueblo, a fin de que sea la autoridad máxima quien revise la Resolución y en lo posterior, la rectifique, ya que procesalmente ha quedado demostrado que no existe prueba alguna que demuestre cabalmente que mi mandante haya sido responsable de los daños alegados por el quejoso.
10. A fojas 100 consta la Providencia mediante la cual el Delegado Titular Provincial de Orellana ordena remitir el caso al Defensor del Pueblo, la Resolución emitida dentro del presente trámite Defensorial, por encontrarse presentado la petición de revisión (...). Remisión que se la realiza mediante Memorando No.- 027-DO-RNTO-2012, de fecha 10 de Marzo de 2012, recibido en Secretaría General el 13 del mismo mes y año.



## II. CONSIDERACIONES:

Con estos antecedentes y dado que el Recurso de Revisión se resuelve en mérito de los autos, procedo a formular las siguientes consideraciones:

11. La Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, en el Art. 14 dispone que: cualquier persona, en forma individual o colectiva, que invoque un interés legítimo, sin restricción alguna podrá dirigirse al Defensor del Pueblo para presentar una queja (...).
12. En concordancia con la Constitución de la República del Ecuador, que en su artículo 215, expresa que: "La Defensoría del Pueblo tendrá como funciones la protección y tutela de los derechos de los habitantes del Ecuador... Serán sus atribuciones, además de las establecidas en la ley, las siguientes: (...) 3. Investigar y resolver, en el marco de sus atribuciones, sobre acciones u omisiones de personas naturales o jurídicas que presten servicios públicos".
13. Que el Art. 26 del Reglamento y Trámite de Quejas, Recursos Constitucionales y Demandas de Inconstitucionalidad de Competencia del Defensor del Pueblo en la parte pertinente mandan: "Toda Resolución dictada por los comisionados provinciales, será remitida al Defensor del Pueblo, quien, a petición de parte presentada ante aquellos, en el plazo de ocho días, la revisará pudiendo ratificarla o rectificarla.

**ANÁLISIS RESOLUTIVO.-** En base a la Resolución y Recurso de Revisión, se entiende que:

14. La Constitución de la República del Ecuador se manifiesta claramente como garante de los derechos humanos que asisten a las personas respetando los principios de no discriminación, progresividad e integralidad, entre otros.

15. Los derechos humanos que se alega se han vulnerado, y por lo que se ha solicitado sean vigilados en este proceso de revisión, son el derecho a la propiedad privada y el derecho a la inviolabilidad de domicilio. En su resolución el señor Delegado Encargado de Orellana determina que se ha producido la vulneración del derecho constitucional que tiene el accionante a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, libre de contaminación y en armonía con la naturaleza tal como lo determina el Art. 66 numeral 27 de la Constitución de la República; así también dice, existe la vulneración del Art. 66 numerales 22 y 26 de la misma carta constitucional que refiere al derecho de propiedad en todas sus formas y a la inviolabilidad de domicilio.
16. En el presente caso el accionante manifiesta que él firmó un convenio de pago por indemnización por derecho de paso con la Consorcio Pegaso en una extensión de 14 hectáreas de su propiedad. Sin embargo el Consorcio a través de la Compañía SINOPEC SERVICE Ecuador sin respetar el convenio han ingresado arbitraria y clandestinamente a su propiedad y han procedido a abrir trochas y colocado los puntos de perforación de los explosivos en toda las cincuenta hectáreas de la finca. Esta aseveración es corroborada en el Informe de Inspección No.- 034 (fojas 78 a 80), realizado por personal de la Unidad de Gestión Ambiental del Gobierno Municipal de Francisco de Orellana, en cuyas conclusiones se determina: "(...) Que en la finca del señor Hidalgo Pilco, se ha realizado la apertura de 4 trochas sin la debida autorización de el propietario; Que en la finca del señor Hidalgo Pilco, la compañía PEGASO entró arbitrariamente en su propiedad cortando los árboles maderables que existían a lo largo de la trocha, Que la empresa PEGASO no ha cumplido con las indemnizaciones a los afectados por la actividad de prospección".
17. Sin embargo se debe anotar, que de conformidad al convenio firmado entre el señor Eleuterio Pilco Hidalgo y el Consorcio Pegaso existe una autorización expresa para ingresar a sus propiedades, así como la consideración de pago por los daños

que se pudieran ocasionar a causa de la afectación a su propiedad producto de la actividad sísmica.

18. A su vez la Compañía PEGASO en la contestación a la queja expresa que cumplió con todos los requisitos que la ley establece, incluido el proceso de participación social y difusión del estudio de impacto ambiental por lo que le fue otorgada la licencia ambiental y sus respectivos alcances por lo que en ningún momento se atentado contra los derechos de consulta, participación ciudadana e información como maliciosamente se afirma en la queja. Más adelante señalan que el consorcio PEGASO con el señor Pilco Hidalgo suscribió un " convenio de pago por indemnización por derecho de paso" cuyo objetivo fue conferir a la CONSORCIO PEGASO el derecho de paso por la propiedad del quejoso con el fin de realizar actividades de prospección sísmica, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 4 de la Ley de Hidrocarburos; para lo cual se le canceló una indemnización por las actividades que se desarrollarían en el inmueble de su propiedad, por lo que las obligaciones adquiridas por el CONSORCIO PEGASO han sido plena y oportunamente satisfechas.
19. El CONSORCIO PEGASO alega también la incompetencia del Defensor del Pueblo para conocer el caso ya que la queja ha sido sometida a resolución de otra autoridad administrativa, esto es a la Delegación Provincial del Ministerio de Ambiente de Francisco de Orellana, lo que el propio quejoso señala en su queja. Indican que según lo establecido en el Art. 18 de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, el Defensor del Pueblo está obligado a suspender el expediente y vigilar el debido proceso en las acciones administrativas en marcha. Además manifiestan la incompetencia del Defensor del Pueblo por convenio expreso de las partes debido a que en la cláusula quinta del convenio las partes acordaron que "en caso de existir controversia, conflicto o incumplimiento respecto de este convenio, las partes buscaran un acuerdo directo para solucionarlo, en caso de subsistir el conflicto las partes libre u voluntariamente se someten a ventilar la controversia, ante los jueces competentes del Cantón". Señalan que el pronunciarse

sobre el fondo de la queja constituiría una transgresión de las potestades conferidas al Defensor del pueblo por los artículos 2 y 8 de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, entre otros señalamientos. Aducen a su vez improcedencia de la queja debido a que la indemnización pactada en el convenio de pago se encuentra debidamente cancelada.

20. Del análisis de los párrafos anteriores se puede determinar que si bien se encuentran de por medio derechos como el derecho a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, *sumak kawsay*, como lo establece el Art 12 de la Constitución en concordancia con el Art. 66 numeral 27 de la misma norma suprema; el derecho a la inviolabilidad de domicilio establecido en el Art. 66 numeral 22 y el derecho a la propiedad en todas sus formas según lo establecido por el Art. 66 numeral 26 de la Constitución, violaciones que deberán ser investigadas; no es menos cierto que la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo establece en su Art. 18 que cuando la cuestión o asunto de la queja estuviera sometido a resolución judicial o administrativa, la Defensoría del pueblo se limitará a vigilar el respeto al debido proceso, esto en concordancia con lo estipulado en el Art. 13 del Reglamento y Trámite de Quejas, Recursos Constitucionales y Demandas de Inconstitucionalidad de Competencia del Defensor del Pueblo. **El Delegado al momento de recibir la queja tenía la obligación de realizar el análisis del caso y tomar en consideración esta norma legal al instante de emitir la providencia de admisión de la queja a trámite.**
21. Por otra parte si bien el derecho a la propiedad y el derecho a la inviolabilidad de domicilio está estipulado como un derecho y garantía fundamental, del análisis de la documentación incorporada, en el presente caso, se desprende que existe un convenio firmado y legalizado, cuyo objeto es el pago por indemnización por derecho de paso, en el que se estipulan cláusulas que deben ser cumplidas por las partes, como la que hace referencia a la controversia, lo que determina que en caso de divergencia como ha ocurrido, el asunto debe ser sometido a los jueces competentes quienes deben establecer mediante



sentencia el incumplimiento, la validez o invalidez del convenio.

22. Siendo que en el presente caso, el peticionario alega la existencia de contaminación ambiental en su propiedad. La misma que ha sido puesto en conocimiento de la Dirección Provincial del Ministerio del Ambiente de Orellana, el afectado debió hacer el seguimiento debido e insistir en una respuesta de esta entidad. Si el órgano en cuestión, no hubiese dado respuesta a su pedido, pese a las insistencias del denunciante, provocando indefensión era procedente interponer la petición ante la Defensoría del Pueblo, para que se inicie una investigación por la vulneración del derecho al debido proceso administrativo dentro de la queja que se había iniciado ante el MAE, competencia adecuada y pertinente para el caso en mención que debía haber sido ejercida por el Delegado de la Defensoría del Pueblo en Orellana. Sin embargo al haber recurrido a la Defensoría del Pueblo después de haber realizado la denuncia ante el Ministerio de Ambiente a través de su Dirección Provincial en Orellana, y al no haber sido debidamente direccionada la petición del quejoso se duplicó la actuación de la Defensoría, a la misma que le correspondía únicamente realizar la vigilancia del debido proceso o investigar la acción u omisión por la que el Ministerio del Ambiente no estaba actuando conforme el marco constitucional y legal.
23. Respecto de lo anteriormente manifestado se hace necesario referir que el Art. 82 de la Constitución de la República del Ecuador, manifiesta sobre la Seguridad Jurídica que "El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes", debiendo observarse que para la debida y precisa actuación legal dentro presente expediente defensorial, el entonces Delegado de Orellana contaba con la existencia de normas jurídicas claras, públicas y precisas que determinaban su apropiada actuación jurídica legal en amparo del cumplimiento de los principios y normas legales y constitucionales vigente.

### III. RESOLUCION

24. Por las consideraciones expuestas y de conformidad a las atribuciones constitucionales y legales, especialmente a lo prescrito en el artículo 26 del Reglamento de Trámite de Quejas, Recursos Constitucionales y Demandas de Inconstitucionalidad de competencia del Defensor del Pueblo,

#### RESUELVO:

**PRIMERO: Aceptar** el Recurso de Revisión interpuesto por el señor Pablo Antonio Flores Cueva, Apoderado General y representante legal de la Compañía CAMPO PUMA ORIENTE S.A., persona jurídica que a su vez comparece en su calidad de representante legal y operadores del CONSORCIO PEGASO, en virtud de lo estipulado en los artículos 215. 4 de la Constitución de la República, artículos 18 de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, en concordancia con el Art. 13 del Reglamento y Trámite de Quejas, Recursos Constitucionales y Demandas de Inconstitucionalidad de Competencia del Defensor del Pueblo, a esta Defensoría le correspondía únicamente, en el presente caso, la vigilancia del Debido Proceso, debido a que la queja ya se encontraba sometida a conocimiento y resolución administrativa de la Dirección Provincial del Ministerio de Ambiente, como lo señala el propio afectado en el texto de la denuncia presentada ante Delegado de la Defensoría del Pueblo en Orellana.

**SEGUNDO: Rectificar totalmente** la Resolución emitida por el Delegado de Orellana y en consecuencia negar las pretensiones solicitadas por el señor Pilco Hidalgo Eleuterio en la petición formulada a la Defensoría del Pueblo por los argumentos señalados en el punto anterior.

**TERCERO: Solicitar** al Ministerio del Ambiente de Orellana, que atienda e intervenga de manera eficaz en la denuncia presentada por el señor Pilco Hidalgo Eleuterio, se actúe con el debido apremio de manera justa e imparcial y al amparo de un análisis jurídico e integral de derechos se disponga urgentemente las diligencias correspondientes y necesarias mediante las cuales se proteja y se

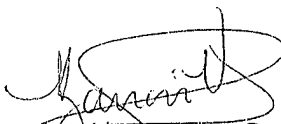
salvaguarde, los intereses no solo de las partes en conflicto sino de la naturaleza como sujeto de derecho, con el fin de que se brinde una solución oportuna, adecuada, pertinente y legítima permitiendo el fiel cumplimiento del imperio del derecho constitucional debidamente establecido.

**CUARTO: Recomendar** al señor Pilco Hidalgo Eleuterio que en lo referente a los derechos a la propiedad privada e inviolabilidad de domicilio, recurra ante los jueces competentes para hacer prevalecer sus derechos, en vista que existe de por medio un convenio firmado entre las partes.

**QUINTO: Dejar** sentada la correspondiente censura al entonces delegado de la Provincia de Orellana Ab. Vinicio Jiménez Villares, por no haber brindado, al momento de emitir la providencia de admisión, una adecuada y apropiada orientación jurídica legal respecto de la acción pertinente a ejercer dentro del presente expediente defensorial.

**SEXTO: Dejar** a salvo el ejercicio de los derechos; garantías jurisdiccionales y acciones administrativas y/o judiciales que se crean asistidas las partes.

**SEPTIMO.- NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.**



Abg. Norma Alexandra Banchón Vázquez.

**ADJUNTA PRIMERA DEL DEFENSOR DEL PUEBLO (SUBROGANTE)**

**Quito, Agosto 23 de 2012**

Estas son copias iguales al original  
que en SEIS (6) fojas reposan en el  
**ARCHIVO DE LA DELEGACION PROVINCIAL DE  
ORELLANA**

(EXP. DEFENSORIAL No. Q22010000208-2010  
RECURSO DE REVISIÓN  
RESOLUCION DEFENSORIAL No. 019-AP-DPE-2012  
y a las cuales me remito en caso necesario.

LO CERTIFICO



**Julio Zurita Yépez  
SECRETARIO GENERAL  
DEFENSORIA DEL PUEBLO**

